

Cultura política venezolana: tensión entre personalismo e institucionalidad en el cambio de siglo

Andrés Cañizález
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
Venezuela

andres.canizalez@ucla.edu.ve

Recibido: 30 de mayo de 2026/Aprobado: 26 de junio de 2026

DOI:[10.5281/zenodo.21776710](https://doi.org/10.5281/zenodo.21776710)

Magister y doctor en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, Venezuela). Posdoctorado en Ciencias Sociales (Universidad Central de Venezuela). Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor en la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y profesor en la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Director General de la [Asociación Civil Medianálisis](#).

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0680-6211>



Cultura política venezolana: tensión entre personalismo e institucionalidad en el cambio de siglo

Resumen

Partiendo de una concepción de la cultura política como fenómeno histórico dinámico que condiciona, sin determinar, las actitudes, normas y creencias sociales hacia lo político en estrecha relación con las instituciones y la participación ciudadana, este ensayo examina cómo las relaciones primarias y personalistas han prevalecido históricamente en Venezuela sobre las normas impersonales e institucionales, fenómeno acentuado en una economía bajo un Estado rentista con una administración pública disfuncional. Se analiza el proceso de desinstitucionalización y polarización de las décadas de 1980 y 1990 —crisis económica, el estallido social conocido como el "Caracazo", intentos de golpe y colapso del bipartidismo— que culminó en la elección de Hugo Chávez en 1998 y en la personalización extrema de la política. Encuestas de fines del siglo XX, reseñadas académicamente, mostraban entre los venezolanos una orientación que favorece soluciones mesiánicas y de mano dura. Se concluye que los cambios radicales inaugurados en 1998 están insertos en estas matrices culturales preexistentes: el discurso chavista halló eco precisamente porque articulaba los valores sustantivos que los venezolanos asocian con la democracia, priorizando el voto y las políticas sociales por encima de los contrapesos institucionales.

Palabras clave: Venezuela, cultura política, instituciones, democracia, polarización.

Venezuelan Political Culture: Tension Between Personalism and Institutionalism at the Turn of the Century

Abstract

Based on a conception of political culture as a dynamic historical phenomenon that shapes—without dictating—social attitudes, norms, and beliefs toward politics in close relation to institutions and citizen participation, this essay reviews how primary and personalistic relationships have historically prevailed in Venezuela over impersonal and institutional norms, a phenomenon intensified in a rentier state economy with a dysfunctional public administration. The process of deinstitutionalization and polarization in the 1980s and 1990s —economic crisis, the social outbreak known as the Caracazo, coup attempts, and the collapse of the two-party system, culminating in the election of Hugo Chávez in 1998 and the extreme personalization of politics, is analyzed. Surveys from the late 20th century, as reported by the Academia, showed a tendency among Venezuelans towards encouraging messianic and hardline solutions. It is concluded that the radical changes introduced in 1998 are embedded in these preexisting cultural frameworks: Chavista rhetoric resonated precisely because it articulated the substantive values that Venezuelans associate with democracy, prioritizing the vote and social policies over institutional checks and balances.

Key Words: Venezuela, political culture, institutions, democracy, polarization.

En Venezuela no ha existido un poderoso marco ideológico
capaz de aglutinar esfuerzos, exigir sacrificios, postergar
gratificaciones y dar un sentido de orientación
al país o a sus grupos dirigentes.
En el último cuarto de siglo sólo hemos tenido
un conjunto más o menos difuso de ideas
que se refieren a que el país debe desarrollarse,
que debe ser democrático
y que debe haber igualdad social.

Moisés Naím y Ramón Piñango
El caso Venezuela: Una ilusión de armonía, 1986.

El “antes del inicio”

En este momento, en el campo académico venezolano, hay una postura ampliamente extendida según la cual, tras el triunfo de Hugo Chávez en 1998 y su ascenso al poder el 2 de febrero de 1999, se produjo un parteaguas en la historia política e institucional de Venezuela. En un primer momento, haremos una disección de lo que podría ser el “antes del inicio”, es decir, aproximarnos a una lectura en torno a otro momento emblemático de aquel fin del siglo XX en Venezuela, el año 1992.

Friedrich Welsch (1992), director fundador de los programas de postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB), examinó la transformación de la cultura política venezolana en un contexto de crisis económica, ajuste estructural y descrédito institucional. El autor constató que, pese a la recuperación macroeconómica posterior al programa de estabilización de 1989, se observa un “creciente cinismo” (Welsch, 1992, p. 16) manifiesto en la pronunciada pérdida de popularidad del gobierno de Carlos Andrés Pérez justo cuando los indicadores económicos habían mejorado.

Welsch documenta el progresivo deterioro de la confianza en las instituciones fundamentales: los partidos, los poderes legislativo y judicial, así como los sindicatos. Las encuestas revelaban que la fe en los partidos como organizaciones democráticas se había desplomado de 13 % en 1973 a solo 4 % en 1990; mientras tanto, la percepción de que el sistema era incapaz de resolver los problemas del país subió al 49 % ese mismo año (Welsch, 1992, p. 17). Paralelamente, aumentó la abstención electoral y se multiplicaron las acciones de protesta, muchas de ellas violentas.

Lejos de interpretar estos fenómenos como mera apatía, el politólogo alemán cuya producción académica giró en torno a Venezuela, identifica el surgimiento de “una nueva cultura política caracterizada por el desencanto ante las lacras de la democracia venezolana, que se manifiesta en nuevas formas de participación y posiciones críticas, aunque no destructivas del sistema” (Welsch, 1992, p. 17). Esta evolución implica el paso de un cinismo pasivo a un compromiso más activo, aunque puesto en práctica fuera de los partidos políticos.

El texto recalca también la inmovilidad de las élites y la ineficacia del discurso de consenso nacional, que pretendía restaurar un pacto concordante ya superado por la historia. Ante esta brecha entre cultura política y respuesta institucional, Welsch propone una doble estrategia: democratizar los partidos desde dentro y reforzar la presión desde fuera mediante modalidades no convencionales

de acción política (Welsch, 1992, p. 19). De este modo, tras el fallido golpe de Estado de febrero de 1992, el análisis de Welsch anticipa la profunda erosión del sistema político venezolano, una que marcaría el fin del siglo XX y el inicio de una nueva etapa de vida institucional en ese punto de inflexión de 1999 con el ascenso de Chávez al poder. Justamente nos parece pertinente reflexionar, ya a la distancia de un cuarto de siglo en algunos casos, en la perspectiva conceptualizada por diversos autores para una mejor comprensión del cambio de época política en Venezuela, coincidente con el cambio de siglo.

Algunas precisiones indispensables

A este punto y antes de profundizar en los rasgos de la cultura política de los venezolanos, es indispensable precisar algunos aspectos. Bajo la perspectiva de González Fabre, se puede colegir que la cultura “es un acontecimiento histórico” y, en nuestra cotidianidad, “la recibimos de nuestros mayores, la modificamos con nuestro modo de vida y nuestras acciones, y la transmitimos modificada a las siguientes generaciones” (González Fabre, 2005, p. 10). En consecuencia, si bien no es un patrimonio que dicte las acciones de la sociedad o las comunidades inmersas en ella –la posición reduccionista de los culturalistas–, inobjetablemente influye en nuestras acciones. Dicha dinámica implica que las personas portan el trasfondo de su historia sin perder la capacidad de cambio conferida por su libre arbitrio. Ambas realidades no solo son evidentes en su esfera privada, sino también, y predominantemente, al relacionarse con otros, en el contexto de las interacciones propias de sus comunidades o su sociedad. Sin determinar la vida social, la cultura sí la influye.

Para Di Tella (2004, p. 146), la cultura política es “el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas más o menos ampliamente por los miembros de una determinada unidad social y que tienen como objeto fenómenos políticos”, una definición ampliamente extendida que también acogemos para este análisis. Este destacado sociólogo y pensador argentino nota, empero, que su definición puede ser restrictiva. Por ello, estima que tal conceptualización no solo se debe incluir en el discurso político o social “cuando hable de política”, sino también cuando la política –aunque subyazca tácitamente en las relaciones entre los individuos– tenga un impacto transformador en “instaurar deberes, construir esperas y ciertas nociones del espacio social, generar creencias, obtener confianzas en determinados sistemas, etc.” (Di Tella, 2004, p. 146). En fin, la política abarca variados ámbitos de la sociedad y de los individuos.

Asimismo, se debe abordar la cultura política en el marco de las instituciones y la participación ciudadana. Puede resumirse lo propuesto por Miguel Andrade y Christian Miranda en que ejercer la ciudadanía, participar como ciudadanos en la sociedad, conlleva ciertos condicionantes, siendo el fundamental la pertenencia –activa o pasiva– a una comunidad política; otro condicionante es la presencia de mecanismos e instituciones que regulen, articulen, concreten y negocien la gama de intereses en la sociedad; en tercer lugar, que la comunidad sepa que es libre de participar y decida hacerlo a conciencia de los derechos y deberes implícitos en ello, siendo posible así plantear sus intereses y demandas, así como disponerse a impactar en las decisiones públicas derivadas de estos espacios; como cuarto condicionante está la vigencia de un espacio público para interactuar y validar la gama de intereses concurrentes en la sociedad (Andrade y Miranda, 2000, pp. 4-5).

La interacción de las personas con las instituciones da lugar a tensiones a diferentes niveles. Un ejemplo sería la percepción socialmente compartida en Venezuela como una mera falta reglamentaria –en vez de como una acción

moralmente objetable— sobre infringir una norma gubernamental para favorecer una relación personal. Visto así, se cambia el rasero dependiendo de la persona implicada. Ello ocurre en sociedades que no se entienden como cimentadas sobre un sistema de relaciones institucionales, sino edificadas sobre el tramado social de relaciones primarias. En esta dinámica, “mediatizar la relación personal a favor de las reglas impersonales cobra un sesgo de inmoralidad: ¿cómo no facilitarle la vida a un amigo?” (González Fabre, 2005, p. 27).

Por varias décadas, Venezuela ha experimentado iniciativas y procesos de modernización mediante los que se ha procurado sustituir las relaciones primarias con normas e instituciones modernas. No obstante, tales esfuerzos han sido dispares y a ratos contradictorios. A ello se suma que, en algunos ámbitos, ha sido evidente un franco retroceso durante la primera cuarta parte del siglo XXI. El modelo de conciliación entre élites que sostuvo el sistema democrático venezolano a partir de 1958 no consistía en un acuerdo entre familias o amigotes. Dicho modelo mostraba una mediación institucional que “llegó a ser de partidos y no de caudillos, para luego volver a concentrarse en un caudillo” con la irrupción de Chávez en 1999 (González Fabre, 2005, p. 31). En este sentido, se modernizaron en alguna medida las Fuerzas Armadas, así como distintas instituciones. Sin embargo, el personalismo del liderazgo al frente de las mismas les imprimió su orientación determinante. Tales entidades que procuraban, sobre todo tras el primer boom petrolero en la década de los 1970, presentarse como modernas, aún admitían la referencia personal (de amigos o familiares en posiciones de autoridad) como patrón culturalmente aceptado. En pocos casos excepcionales, se buscó hacer prevalecer la meritocracia en ámbitos como las universidades públicas o la industria petrolera, recién nacionalizada en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979).

La ambigua o disímil modernización venezolana se ha vinculado con nuestros aspectos disfuncionales como sociedad. Según notaba González Fabre:

Resulta clara la incapacidad de nuestro sistema económico para producir internamente lo preciso para el bienestar de la población de acuerdo a las expectativas históricas del país. Quedamos entonces fiados al nivel de una renta que se genera fuera del control nuestro. (González Fabre, 2005, p. 34)

De acuerdo con este estudioso de las realidades venezolanas, tal disfuncionalidad comporta tres aspectos: primero, la ineficiencia inherente del Estado en producir bienes y servicios tras añadir dicha tarea a sus roles; segundo, un empresariado rentista habituado a mercados locales protegidos por un Estado que no define reglas de juego perdurables; tercero, una población con expectativas de consumo poco vinculadas con la capacidad real de la producción nacional.

El resultado de una sociedad fundamentalmente dependiente de una renta cuyas posibilidades efectivas de producción no controla es que una parte importante de la población, según estudios desde fines de los años 1970, opine lo encapsulado así en esta paráfrasis acuñada por recurrido sacerdote jesuita, investigador y profesor universitario venezolano:

Venezuela es ‘un país rico cuyo problema consiste en que los corruptos se han apoderado del Estado y lo están saqueando’. Debemos pues “poner en la presidencia a un hombre íntegro, preocupado por el país y por los pobres”, y con ello “se resuelve el problema’. (González Fabre, 2005, p. 41)

Esta percepción entre los venezolanos, ciudadanos y líderes políticos y empresariales está masivamente diseminada y se vuelve prevaleciente en tiempos de crisis.

Los años de la ruptura con el modelo de 1958

En las décadas de los 1980 y 1990, el sistema político venezolano estuvo inmerso en eventos que erosionaron su credibilidad y demostraron la pérdida de su capacidad para articular intereses: la crisis cambiaria denominada el “Viernes Negro”, los disturbios conocidos como “el Caracazo”, los intentos de golpe de Estado de 1992, el juicio a un presidente en funciones, la crisis de quiebra e intervención en la banca. El desenlace de estos eventos fue 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales tras haber prometido “desmontar las bases de un sistema corrupto y agotado”. Carlos Guzmán indicó que comenzaron a hacerse evidentes cambios de rumbo, valoración y percepciones de los venezolanos con respecto a la política (Guzmán, 2005, pp. 61-62). Para ese entonces, de manera llamativa, surgieron “nuevas formas de acción colectiva en términos de campos antagónicos y excluyentes, inclinados por opciones radicales y antisistémicas” (p. 62).

El contexto de estos fenómenos fue la desaparición en términos prácticos de la intermediación partidista, aunada a una crisis de las instituciones democráticas que presentaba estas características: élites políticas cuestionadas, utilitarismo en la política y la toma de decisiones en sí, partidos deslegitimados, desideologización de la política, declive de la identificación, el apego o la afiliación de la población con algún partido o de su participación en elecciones, desplome de la confianza en las instituciones y una pérdida de confianza en los partidos y su liderazgo. De acuerdo con José Molina Vega, (citado por Guzmán, 2005, p. 62), este proceso de desinstitucionalización concurrente con la “personalización de la política” indica que los venezolanos hacían una reevaluación de su propia cultura política. Esto presagiaba cambios que ocurrían en la ciudadanía.

Se presenció, con más ímpetu desde fines de los 1980, el declive de un bipartidismo atenuado, definido así por José Molina Vega (según cita Guzmán, 2005) y conocido por el predominio de dos partidos con sucesivos ejercicios alternados de gobierno, es decir, Acción Democrática (AD) y COPEI, más la presencia de una tercera fuerza relevante (Movimiento al Socialismo, MAS), cuya votación en elecciones legislativas osciló de 5 % a 10 % entre 1973 y 1988. En la primera parte de los años 1990, se transitó a un modelo consensual, no polarizado e institucional, con una distribución más diversa de partidos al frente de instancias locales de gobierno. Ya para las elecciones de 1998, entramos en una fase en la que surgen la desafección partidista y el voto antipartido. Conforme a Molina Vega (citado por Guzmán, 2005, p. 62), se trata de un proceso que daría paso a la figura de un liderazgo personal, al consumarse una desconexión y cierta desvinculación entre los partidos, la sociedad y la opinión pública. Entre otras cosas, esto trastorna los procesos de socialización política.

Varios autores registraron transformaciones en la cultura política. Dichos cambios, manifiestos primordialmente en la última década del siglo XX, iban acompañados de inequívoco declive y desinstitucionalización de los actores políticos tradicionales, imbuido esta vez en la polarización y la desafección con las organizaciones partidistas, también presentando rasgos de volatilidad electoral, aparejado de la reestructuración del sistema político, el triunfo de nuevas agrupaciones políticas, así como la convocatoria y aprobación de una nueva constitución. Sin embargo, este análisis no puede abarcar solamente las instituciones. El modelo de sistema político venezolano iniciado en 1958 mostraba, como forma de su desgaste, un deterioro notable del marco institucional; como fondo del mismo, revelaba evidencias de muchos otros factores vinculados con las percepciones, las creencias, las opiniones, las evaluaciones y las actitudes concomitantes a la actividad política cotidiana. En específico, se trataba de factores

que confirmaban una particular representación social venezolana sobre el término democracia (Oropeza, 2008).

Como ilustración, el artículo de Carlos Guzmán “La cultura política del venezolano” relata que, en 1995, se realizó una encuesta sobre la cultura democrática nacional en tres ciudades venezolanas con 700 participantes (300 Caracas, 200 en Maracaibo y otros 200 Mérida) por parte de Consultores 21, con apoyo de la Fundación Pensamiento y Acción, bajo patrocinio del Instituto Republicano Internacional (Guzmán, 2005, p. 62). En relación con la definición normativa de democracia en Venezuela, los resultados indicaron lo siguiente: 1) La mayoría de los venezolanos quiere la democracia, aunque no a cualquier precio; 2) La “democracia pensada” estaba asociada fundamentalmente con libertad, como aspecto positivo, y con una serie de males presentes (corrupción, etc.); 3) La “democracia deseada” se refiere a unos principios (justicia, igualdad) y a unos “bienes tangibles” (seguridad, desarrollo económico, bienestar), en condiciones de libertad, responsabilidad, orden y participación ciudadana.

Según el sociólogo Tulio Hernández, en la década de los años 1990, Venezuela pasó por transformaciones profundas de su sistema político, con un panorama de fragmentación, ruptura y polarización (Hernández, 2005). Dichos fenómenos están en el país a partir de la desconfiguración de las identidades políticas y de las representaciones sociales que habían cumplido el rol de sustento cultural y aglutinante ideológico del sistema político desde el inicio del modo de convivencia instaurado en 1958.

No obstante, no se puede asumir un tránsito automático de cambios políticos a transformaciones de la cultura política. Conviene recordar lo señalado por Thais Maingon y Jorge Díaz Polanco:

La teoría de la cultura política señala que los cambios en una sociedad son a menudo el resultado de un conjunto de procesos que se viene gestando desde hace algún tiempo y por lo tanto es requisito que éstos se encuentren lo suficientemente presentes en la sociedad para estar en condiciones de medirlos, analizarlos, aprehenderlos y comprenderlos. Los cambios de la cultura política no son fáciles de estudiar y demandan análisis sucesivos en el tiempo para darle seguimiento a las opiniones, percepciones y actitudes que tienen o expresan los ciudadanos respecto a los mismos. (Maingon y Díaz Polanco, 2002, p. 3)

El concepto de cultura política describe “las actitudes, creencias y reglas que guían un sistema político, que están determinadas conjuntamente por la historia del sistema y las experiencias de sus miembros”; los valores, concepciones y actitudes orientados hacia el ámbito específicamente político, es decir, los elementos que conforman “la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder”, son la médula de lo que se denomina cultura política ⁽¹⁾ (Guzmán, 2005, p. 64). Es conveniente mantener esto en mente para ponderar los cambios sustanciales ocurridos en los últimos años y su relación con la cultura política de los venezolanos.

1 Por su parte, Oropeza (2008) precisa que el término “cultura política” ha sido usado como un “concepto paraguas”, que cubre –como definición mínima– la estructura compleja de percepciones, creencias, valores y conductas relacionados con la política, compartida por la mayoría de los miembros de una sociedad.

Los venezolanos y la democracia en el cambio de siglo

Al revisar de sondeos de opinión, se puede empezar a apreciar la relación entre los venezolanos y la democracia. Según Ángel Oropeza, los datos permiten sugerir el predominio de una concepción particular de democracia donde las referencias a los estilos autocráticos y de mano dura son más frecuentes que las referencias a contenidos que resalten la importancia del consenso y de las soluciones conciliatorias como norma distintiva de un sistema democrático. De acuerdo con este autor, “hay razones para suponer la existencia en la Venezuela contemporánea de una tensión entre conflicto y consenso”, cuando se aborda la representación social de la democracia entre los venezolanos (Oropeza, 2008).

Tal tensión o incluso contradicción se ve claramente al revisar los estudios realizados por Latinobarómetro desde 1995 hasta el 2004, mediante la realización anual de su Encuesta Latinobarómetro. Los datos indican una postura claramente dominante por parte de los venezolanos en el rechazo a los gobiernos militares. Sin embargo, ante el auge de problemas como delincuencia, inseguridad ciudadana y corrupción, los venezolanos consideraban necesario que el gobierno aplicara medidas más drásticas. Así, el argumento de que un poco de mano dura del gobierno no le venía mal al país alcanzaba un 78% de aceptación en 1995 y descendía a 53% en 2004 (Corporación Latinobarómetro, 1995, 2004). Otro dato arrojado revela que Venezuela está entre los cinco países donde la percepción ciudadana es más baja en relación con esta idea: la discusión pública favorece a la democracia; sólo 49 % de los venezolanos cree en ello, mientras que en Uruguay lo hace el 72 % (Corporación Latinobarómetro, 2004, p. 10).

Para algunos autores (Guzmán, 2005, p. 65), en Venezuela debe hablarse de una cultura política autoritaria y otra cultura política democrática contrapuestas. De acuerdo con Guzmán, los resultados de las encuestas de opinión pública desde 1979 indican que, en términos generales, entre los venezolanos existe una marcada tendencia a dar mayor importancia a características sistémicas asociadas a los valores de orden, libertad, justicia e igualdad para la consecución de ciertos fines sustantivos (Guzmán, 2005, pp. 65-66). Esto significa, a grandes rasgos, que el venezolano parece darles mayor importancia a características sistémicas como “condición” de situación social que a los elementos procedimentales de la democracia, si la entendemos como un procedimiento político instaurado para defender los derechos y las libertades de los individuos frente al poder del Estado.

Tal como lo han constatado otros investigadores, los venezolanos perciben la democracia como aquel sistema de gobierno que tiene como rol dual el mantenimiento del orden y de la libertad (Maingon y Díaz Polanco, 2002, p. 4). Sin embargo, es importante matizar, conforme a Oropeza (2008), que al aludir a la noción de libertad, se hace menester establecer una diferencia entre una concepción individual, personal, y otra más social o política del término. En su perspectiva, la población de Venezuela parece dar prioridad a la libertad conductual de las personas por sobre la calidad de las libertades públicas. (2)

2 En el caso de Venezuela, según Oropeza (2008), varias investigaciones indican la preeminencia de una restringida concepción individual de libertad (o “libertad negativa”, asociada principalmente a la ausencia de restricciones o limitaciones), en detrimento de la necesaria (y complementaria) concepción positiva o política del término. Según estos hallazgos, el venezolano privilegia –o, al menos, presta más atención– a la libertad conductual de las personas que a la calidad de las libertades políticas, que son justamente las que garantizan la viabilidad y permanencia en el tiempo de las primeras. Esto permitiría explicar algunas de las aparentes paradojas en su comportamiento político.

Para los venezolanos en general, la democracia se vincula principalmente con lograr ciertos fines sustantivos, tales como la “mayor suma de felicidad posible”, la igualdad, la comprensión, la justicia, y el “bienestar general” (Oropeza, 2008). Desde dicho ángulo, los venezolanos tienden a entender la democracia principalmente como un sistema que garantice a la población la satisfacción de demandas sociales.

Los hallazgos de una amplia investigación de Gladys Villarroel en 1993, difundida en 1996, muestran que los venezolanos en aquel momento favorecían ante todo una democracia vertida hacia el desarrollo económico con contenido social. Tiene preeminencia entre los venezolanos, por lo tanto, una noción de democracia como “condición” o “democracia sustantiva”, a la que se suma una concepción de democracia como “método” u “operativa” en menor proporción. Asimismo, esta última se limita esencialmente a su dimensión electoral, relegando otros aspectos formales que caracterizan a un modelo democrático a un segundo plano. Algunos de estos asuntos secundarios son: control civil sobre el estamento militar, tolerancia a la oposición, contrapesos entre poderes públicos, transparencia en procesos electorales, etc. (Villarroel, 1996). Tal predominio del aspecto electoral es útil en comprender por qué Venezuela encabezó el informe Latinobarómetro 2005 con la pregunta “¿Cuán democrático es el país?” En una escala del 1 al 10, en la cual 10 era equivalente a totalmente democrático, la valoración dada por los venezolanos fue de 7,6 (Latinobarómetro, 2005, p. 49).

Con las peculiaridades de Venezuela, la opción por la democracia parece haber dominado el panorama del país desde 1958. Además, no puede restarse importancia a tal logro político para la convivencia social. Desde que se iniciaron los primeros estudios de opinión sobre valores políticos en la década de los años 1970, el apoyo al modelo democrático ha permanecido históricamente alto, más allá de la insatisfacción con la gestión de algunas administraciones y el menoscabo en la credibilidad en los partidos.

Realizadas en Venezuela en 1995-1996 y 2000, las Encuestas Mundiales de Valores (citadas por Guzmán, 2005) inquirían a los entrevistados su grado de concordancia con la aserción: “La democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otro sistema de gobierno”. El porcentaje de quienes estuvieron muy de acuerdo o de acuerdo con esta afirmación fue 86 % en 1995 y 93 % en el 2000. Como puede inferirse, los venezolanos han persistido en su apoyo al sistema político democrático a despecho del proceso de desinstitucionalización de los dos modelos partidistas anteriormente descritos (bipartidismo atenuado, consenso no polarizado e institucional).

Sin embargo, como recuerda Carlos Guzmán (2005, p. 68), a pesar de este apoyo claro al sistema democrático, no puede soslayarse que, so pretexto de restablecer el orden, históricamente ha gravitado la posibilidad de una salida militar. El estudio de Baloyra en 1973 (citado por Guzmán, 2005, p. 68), un año desde el cual consideraban un golpe militar en Venezuela algo viable, “más de la mitad de los entrevistados (51 %) creían que, ‘en ciertas ocasiones, se justificaba un golpe de Estado’, ya fuera su inspiración ideológica de izquierda (55 %), centro (56 %) o derecha (55 %)”.

Este hallazgo queda corroborado por una investigación de Adolfo Vargas y Zaira Reverón realizada en 2004 (citada por Guzmán, 2005). Si bien había un rechazo al modelo de una dictadura militar per se, un 35 % de los venezolanos apoyaba una salida de fuerza “si de esta manera pudiésemos resolver los problemas económicos y sociales del país” (Guzmán, 72). El apoyo baja sustancialmente cuando se usa el término dictadura; sólo 15% la respaldaba entonces.

Otra contradicción propia de un campo como la cultura política, nutrida por percepciones e interpretaciones subjetivas de los ciudadanos, se vincula al rol del sistema democrático en generar consensos o no. De acuerdo con Oropeza (2008), en Venezuela existe una concepción de democracia que enfatiza la importancia o necesidad de los consensos entre distintos participantes para la toma de decisiones.

A esta noción, se suma otra que parece recalcar la exigencia de que el gobierno asuma “ejecutivamente” las decisiones estimadas como necesarias, aun mediante prácticas coercitivas, por encima de la búsqueda de consensos y transacciones.

Junto a la mencionada disyuntiva entre consenso y prácticas coercitivas, existe una clara personificación de la política, particularmente del ejercicio del poder. Según Oropeza (2008), el predominio de contenidos alusivos a un *locus* externo de control por sobre uno interno es evidente. Por consiguiente, a partir de este sustento psicológico-actitudinal, la predisposición consiste en privilegiar circunstancialmente el orden por encima de la libertad, así como en aceptar soluciones mesiánicas y fórmulas simplistas para resolver los problemas. Tal fenómeno tiene una recurrencia “tan alta como evidente”.

La elección de Hugo Chávez como Presidente en 1998 debe entenderse como un fenómeno político explicado por múltiples causas. Después de examinar varios aspectos de la comprensión de la democracia por los venezolanos, como parte de su cultura política, y tras revisar anteriormente la crisis institucional experimentada por el modelo democrático de 1958, puede explicarse el ascenso de un outsider de los partidos tradicionales a la jefatura de Estado, así como su persistencia en altos niveles de aceptación popular, amparado en un discurso centrado en la justicia social como prioridad de la acción gubernamental.

La crisis venezolana mirada más allá de nuestras fronteras

Para analizar el tema de la cultura política en Venezuela en las últimas tres décadas, hasta este punto nos hemos enfocado en examinar a autores venezolanos o con permanencia prolongada en el país. Ahora bien, nos parece enriquecedor integrar los aportes de dos miradas foráneas con otras vertientes de análisis.

En primer término, el texto de Kenneth Roberts, “Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela” (2003), ayuda a ubicar el punto de ruptura de un modelo democrático que, a partir de su fundación en 1958, gozó de tres décadas de un relativo éxito en la conciliación de intereses y en la resolución de conflictos. La poblada popular conocida como “el Caracazo”, ocurrida en febrero de 1989, marcó un antes y un después en la vida venezolana. Para Roberts, constituyó el inicio de un periodo de conflictividad y polarización social.

Si bien después de dichos sucesos de estallido social, se ralentizaron aspectos del plan económico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) –y se dio marcha atrás a otros–, este nuevo modelo acentuó las diferencias políticas entre las clases sociales. Las reformas de Pérez enfrentaron resistencia de los líderes empresariales dependientes de mercados locales protegidos y de rentas petroleras administradas por el Estado. Sin embargo, su aceptación en las clases media y alta fue en general mayor que entre los sectores pobres. Poco después de comenzar las reformas, las encuestas de opinión pública mostraron que la clase alta las aprobaba casi dos veces más que quienes se oponían al nuevo modelo. Por su parte, en la clase baja, el número de los que se oponían era más de seis veces superior al de quienes las apoyaban (Roberts, 2003, p. 85).

Por otro lado, al analizar los intentos en el campo académico para explicar la decadencia del sistema democrático en Venezuela, Daniel H. Levine ubica dos tesis que están claramente en el campo de la cultura política. Según Levine, la primera escuela en sentirse reivindicada fue la de los culturalistas. Sus autores sostienen que, en América Latina, existe una unidad cultural subyacente y duradera hostil a la democracia y favorable a formas fuertes y autoritarias de gobierno. Por ello, los esfuerzos por construir formas políticas diferentes (entiéndase democráticas) están finalmente destinados a estrellarse contra la roca de una cultura autoritaria persistente. Otro exponente de esta visión sobre Venezuela es Richard Hillman (Levine, 2001, p. 16).

Otra de las tesis sobre el caso venezolano que identifica Levine está asociada a las características peculiares del petroestado (gigantesca burocracia, excesiva discrecionalidad

de los líderes, corrupción endémica masiva, instituciones elitistas y participación obstruida), las cuales hacen que esta particular democracia no sea ni viable ni democrática; no es democrática porque, cuando el dinero se acaba e incluso si el crecimiento económico se desacelera, el clientelismo se acaba y las lealtades se debilitan; no es democrática porque hay excesivo poder en manos del Estado y las élites de Estado, y demasiadas instancias de decisión quedan fuera del control popular. El trabajo de Terry Karl en 1996 (citado por Levine, 2001, p. 17) es el más cercano a esta posición. Sin duda alguna, el papel que desempeña y el peso que comporta la renta petrolera, según lo anteriormente mencionado, no puede soslayarse al analizar la cultura política del venezolano.

El ingreso pleno al personalismo actual

Desde 1998, con la elección de Hugo Chávez como Presidente, Venezuela experimentó una serie de transformaciones radicales en la política, las instituciones y la narrativa. Aunque no es propósito de este ensayo examinar en detalle la naturaleza de tales cambios, resulta indispensable considerarlos al analizar la cultura política venezolana. En diversos casos, los factores culturales —manifestados en percepciones, opiniones y representaciones colectivas—, contribuyen de manera significativa a explicar los procesos de cambio político.

Los estudios de opinión revelan una tendencia sostenida y mayoritaria entre los venezolanos a apoyar la democracia como sistema de gobierno. De este modelo, destacan principalmente el valor del voto, mientras que otros elementos constitutivos —como los contrapesos institucionales y la participación ciudadana— ocupan un lugar secundario. En este contexto, los procesos consultivos y electorales realizados a partir de 1999 fueron percibidos en sus primeros años por un importante sector de la población como expresiones de vigencia democrática (Pereira Almão, 2001). Durante una década, se llevaron a cabo más de una docena de consultas electorales, entre ellas referendos constitucionales y revocatorios, lo que fortaleció la imagen democrática del país entre amplios sectores.

Otro rasgo distintivo de este periodo es la preferencia consistente por el sistema democrático frente a alternativas autoritarias. Según datos recopilados por Pereira Almão (2001), entre 1983 y 2000 la proporción de venezolanos que se autodefinían como demócratas se mantuvo en niveles altos y estables —oscilando entre el 79% y el 94%—, incluso durante la década de 1990, marcada por una profunda crisis política, dos intentos de golpe de Estado y una notable desafección hacia los partidos tradicionales.

La autora destaca que, en el año 2000, tras la aprobación de la nueva Constitución y el amplio consenso en torno a la necesidad de refundar el modelo político, se registró un renovado fervor democrático. El liderazgo de Chávez estimuló un entusiasmo masivo por la democracia, que abarcó tanto a sectores muy descontentos como a aquellos de tendencia radical previamente resistentes a dicho sistema (Pereira Almão, 2001). El discurso chavista, con sus constantes referencias a la justicia social —uno de los valores más asociados por los venezolanos al modelo democrático— y a la soberanía popular, contribuyó a reactivar el interés político en amplios grupos que habían experimentado un prolongado letargo.

Finalmente, en este periodo de transición, resulta revelador que los venezolanos atribuyeran a la democracia aspectos vinculados más bien a la acción gubernamental. En la encuesta Redpol de 1998, al preguntar de forma abierta sobre “lo peor de la democracia”, el 46 % mencionó la corrupción, el 28 % la ineficacia social y funcional del Estado (pobreza, desatención social y deficiente administración) y el 13 % la delincuencia (Pereira Almão, 2001). Como señala la autora, los entrevistados no identificaron ninguno de los rasgos institucionales propios de la democracia como sus defectos principales, sino los efectos negativos de las políticas gubernamentales. Esta distinción refuerza la creencia extendida de que la democracia debe traducirse fundamentalmente en políticas sociales efectivas.

Tal comprensión probablemente explica el amplio respaldo que recibió en 1998 la propuesta de cambios radicales de Hugo Chávez: se entendía como un esfuerzo para

transformar el modelo de gobierno del país sin abandonar el sistema democrático, percibido primordialmente como la realización de elecciones regulares.

A modo de conclusión

Al cierre de este recorrido por el debate sobre la cultura política venezolana en los albores del siglo XXI, resulta claro que el ascenso de Hugo Chávez en 1998 no constituyó un parteaguas abrupto ni una ruptura radical con el pasado inmediato, sino la culminación lógica y previsible de matrices culturales profundamente arraigadas. Lejos de representar un fenómeno exógeno o puramente coyuntural, el proceso iniciado ese año se insertó en una suerte de tradición histórica donde las relaciones primarias y personalistas han prevalecido sistemáticamente sobre las normas impersonales e institucionales en Venezuela.

Ello explica la conformación de una nueva élite de origen militar, principalmente en torno al poder político de la entonces naciente Revolución Bolivariana. Como ha quedado expuesto a lo largo de estas páginas, siguiendo la conceptualización de González Fabre (2005), la cultura política venezolana se configura como un acontecimiento histórico dinámico: se hereda, se modifica y se transmite, condicionando sin determinar las actitudes colectivas hacia lo político. En este sentido, la personalización extrema del poder que ha caracterizado la era chavista no surgió de la nada, sino que hizo eco de una predisposición cultural inveteradamente arraigada, subsiguientemente forjada en el contexto de una economía rentista petrolera y una disfuncionalidad estatal crónica.

El diagnóstico de Friedrich Welsch (1992), anterior al inicio del cambio, refleja el cinismo creciente, la pérdida de confianza en las instituciones y el tránsito de un desencanto pasivo hacia formas de participación crítica. A fin de cuentas, esto expone cómo la crisis de los años 1980 y 1990 no fue mera consecuencia económica, sino evidencia de una erosión cultural más profunda. El "Caracazo", los intentos de golpe de 1992, el colapso del bipartidismo y la desinstitucionalización progresiva no solo deslegitimaron a los actores tradicionales, sino que pusieron de manifiesto la fragilidad de un pacto democrático que, aunque exitoso en su fase inicial desde 1958, comenzó a mellarse cuando el país vivió su primera gran crisis económica tras un gigantesco *boom* petrolero.

Tal como señalara Carlos Guzmán (2005), este proceso, una especie de tránsito de la sociedad venezolana tras la crisis cambiaria y de balanza de pagos conocida como "Viernes Negro", implicó una revisión profunda de la propia cultura política del venezolano, marcada por la personalización de la política y el desafecto por los partidos. Las encuestas de fines del siglo XX, revisadas por autores como Ángel Oropeza (2008) y Thais Maingon y Jorge Díaz Polanco (2002), corroboran esta interpretación: los venezolanos mostraban una concepción de la democracia predominantemente sustantiva, priorizando fines como la justicia social, el orden, la igualdad y el bienestar económico por encima de los aspectos procedimentales, a saber, contrapesos institucionales, tolerancia a la oposición o control civil de las fuerzas armadas. La preferencia por soluciones mesiánicas y de mano dura, documentada en *Latinobarómetro* (1995, 2004, 2005) y en estudios como el de Villarroel (1996), no era un rasgo coyuntural, sino un elemento consustancial de la representación social de la democracia.

En este contexto, el discurso chavista emergió y se reconectó con valores sustantivos que los venezolanos asociaban históricamente con la democracia. El énfasis en la soberanía popular, la justicia social y la redistribución de la renta petrolera —expresados a través de un liderazgo personalista y una retórica antielitista— halló eco instantáneamente porque sintonizaba con la percepción extendida de que Venezuela es un país rico cuya principal dolencia radica en la corrupción y el saqueo estatal, y cuya solución pasa por colocar en la presidencia a un "hombre íntegro" comprometido con los pobres (González Fabre, 2005). Como apunta Kenneth Roberts (2003), la polarización social inaugurada con "el Caracazo" y acentuada por las reformas neoliberales de los 1990 preparó el terreno para este resurgimiento populista. Por su parte, análisis de académicos de otros países, como el de Daniel H. Levine (2001), subrayan cómo las explicaciones culturalistas y las economicistas convergen en identificar la discrecionalidad excesiva de las élites y la debilidad de las instituciones como factores estructurales.

El punto de inflexión 1998 confirmó esta continuidad cultural más que una transformación profunda. Las múltiples consultas electorales y referendos de la primera década chavista reforzaron la imagen de una democracia vigente, centrada en el valor del voto y las políticas sociales, tal como indicara Pereira Almão (2001). Sin embargo, este énfasis en lo electoral y lo sustantivo relegó a un plano secundario los elementos procedimentales e institucionales, facilitando una nueva concentración de poder personalista. La contraposición entre una cultura autoritaria soterrada y una democrática declarada —señalada por Guzmán (2005)— se resolvió, en la práctica, a favor de una democracia entendida como realización de fines tangibles, aun cuando ello implicara tensiones con los consensos y los contrapesos. De esta manera, la personalización del poder no solo se legitimó electoralmente, sino que se nutrió de una predisposición cultural que privilegia el *locus* externo de control y las soluciones simplistas ante la complejidad institucional.

En síntesis, revisitar el debate sobre la cultura política venezolana en los albores del siglo XXI obliga a reconocer que los cambios radicales desde 1998 se insertan en una matriz histórica más extensa, donde la modernización ambigua, la renta petrolera y la prevalencia de relaciones primarias han condicionado persistentemente las formas de participación y las expectativas ciudadanas. Esta dinámica explica tanto la resonancia inicial del proyecto chavista como las dificultades estructurales para consolidar un sistema democrático plenamente institucionalizado, basado en normas impersonales y en una ciudadanía activa no solamente durante periodos electorales.

A poco más de un cuarto de siglo desde el ingreso pleno al personalismo actual, sigue siendo indispensable la reflexión sobre él para comprender no solo el pasado reciente, sino las posibilidades y límites de cualquier esfuerzo futuro por construir una democracia más robusta en Venezuela. La cultura política, como fenómeno histórico y colectivo, no es inmutable; pero su transformación exige reconocer sus raíces profundas y actuar con lucidez sobre las tensiones entre lo sustantivo y lo procedimental, entre lo personal y lo institucional. Solo así será posible avanzar hacia una ciudadanía que, sin renunciar a sus aspiraciones de justicia y bienestar, asuma plenamente los deberes de una democracia genuina.

Referencias

- Andrade, M. y Miranda, C. (2000). *Ciudadanía y educación: Un debate pendiente en Chile*. Universidad Austral.
- Corporación Latinobarómetro. (1995). *Informe Latinobarómetro 1995*. <https://www.latinobarometro.org/documents/LAT-1995/informe-latinobarometro-1995.pdf>
- Corporación Latinobarómetro. (2004). *Informe Latinobarómetro 2004*. <https://www.latinobarometro.org/documents/LAT-2004/informe-latinobarometro-2004.pdf>
- Corporación Latinobarómetro. (2005). *Informe Latinobarómetro 2005*. <https://www.observatorioelectoral.org/documentos/data/info-latinba-2005.pdf>
- Di Tella, T. (2004). *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Ariel.
- González Fabre, R. (2005). *La cultura pública en Venezuela*. Centro Gumilla.
- Guzmán, C. (2005). La cultura política del venezolano. *Comunicación*, 30(130), 60-75. https://gumiteca.org/PDF/COM2005130_60-75.pdf
- Hernández, T. (2005). La polarización política como conflicto cultural ¿De la partidocracia al neautoritarismo popular? *Comunicación*, 30(132), 88-101. https://gumiteca.org/PDF/COM2005132_88-101.pdf

Levine, D. (2001). Diez tesis sobre la decadencia y la crisis de la democracia en Venezuela. En J. Carrasquero, T. Maingon y F. Welsch (Eds.), *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000* (pp. 10-35). Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela.

Maingon, T. y Díaz Polanco, J. (2002). Comportamiento político-electoral del venezolano y construcción de tendencias: 1998 y 2000. *Cuadernos del Cendes*, (49), 3-16.

Naím, M. y Piñango, R. (1986). *El caso Venezuela: Una ilusión de armonía*. Ediciones IESA.

Oropeza, A. (2008, 12 de marzo). *Libertad positiva y liberación popular*. El Nacional.

Pereira Almão, V. (2001). Cambio político radical y actitud hacia la democracia en Venezuela. En J. Carrasquero, T. Maingon y F. Welsch (Eds.), *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000* (pp. 52-68). Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela.

Roberts, K. (2003). Polarización social y resurgimiento del populismo en Venezuela. En S. Ellner y D. Hellinger (Eds.), *La política venezolana en la época de Chávez* (pp.75-96). Nueva Sociedad y Universidad de Oriente.

Villarroel, G. (1996). Democracia sin consenso: Los valores confrontados de la cultura política venezolana. *Espacio Abierto*, 5(2), 224-248. <https://saber.ucv.ve/bitstream/10872/12744/1/Democracia%20sin%20consenso.pdf>

Welsch, F. (1992). Venezuela. Transformación de la cultura política. *Nueva Sociedad*, (121), 16-20. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/2152_1.pdf